

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, Francisco Arango Torres y John Jairo Acosta Pérez, proceden dentro del proceso ordinario con radicado número 05266310500120150022101, promovido por **ANTONIO JAICINIO PALACIOS TELLO EN CONTRA DE CENTRO SUR S.A. y CESAR EMILIO CÓRDOBA PALACIOS**, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la demandada **CENTRO SUR S.A.**, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado el día doce (12) de junio del año dos mil diecisiete (2017).

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **166**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, se solicitó declarar que, entre Cesar Emilio Córdoba Palacios y el actor existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido el cual terminó por causa imputable al empleador, teniendo este último contratación con Centro Sur S.A. y por ende, se declare a los demandados solidariamente responsables del pago de las acreencias laborales derivadas de la relación laboral, como cesantías causadas entre 16 de abril de 2012 al 21 de agosto del mismo año, vacaciones, prima, intereses a las cesantías, indemnización por despido injusto, salario de la última catorcena laborada, indemnización moratoria del artículo 65 del CST, indemnización por no entrega de dotación ni calzado de labor y costas del proceso.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, se expuso, que el actor sostuvo una relación laboral con el señor Cesar Emilio Córdoba Palacios, quien a su vez fue contratista de Centro Sur S.A., mediante un contrato laboral pactado verbalmente para desempeñar el oficio de pilero en la obra en construcción POLARIS CIELO SUR, iniciando labores el 16 de abril de 2012 siendo despedido el 21 de agosto del año 2012. Comentó que en sus funciones seguía las órdenes del señor Cesar Emilio Córdoba Palacios y Centro Sur S.A. por intermedio de Juan Esteban Gaviria Muñoz, quien era el ingeniero o por los maestros de obra, aclaró que la empresa era quien suministraba las herramientas para el desempeño de la labor. Se pactó una asignación salarial que se pagaría cada 14 días equivalente a \$45.000 por metro lineal escavado. \$5.000 por piedra extraída, \$100 por abombe en quema de minería teniendo como última asignación la suma de \$1.960.000.

Narró que la demandada Centro Sur S.A. fue quien supervisó la labor, y se benefició del servicio. Explicó que el señor César Emilio Córdoba reunió a los trabajadores el 21 de agosto del año 2012 indicándoles una disminución en los precios que se habían pactado y que tampoco pagaría la extracción de piedras, lo que produjo un cese de actividades de los trabajadores, siendo retirados de la obra por parte del ingeniero. Culminada la relación laboral, no se le pagó lo devengado entre el 13 y el 21 de agosto de 2012 ni las prestaciones sociales.

Admitida la demanda mediante, una vez notificadas, las accionadas dieron respuesta así:

El señor César Emilio Córdoba Palacios, aceptó la existencia de la relación laboral, pero bajo un contrato por obra o labor determinada, el cual, se encontraba supeditado al contrato civil existente con Centro Sur, que fue suscrito el 9 de julio del año 2010 con el fin de ejecutar las excavaciones de pilas y actividades conexas en tres construcciones: Arboleda del Rodeo II, Sauces del Sur y Polaris Cielo Sur. Aclaró que dicho contrato, se extendió hasta el 21 de agosto del año 2021 en la cual, el señor Juan Esteban Gaviria Muñoz como representante legal de Centro Sur, terminó el contrato de obra civil. Negó la omisión de entrega de dotación informada por la parte actora, e informó que la terminación de la relación laboral se debió precisamente al fenecimiento del contrato por obra civil, pues fue la empresa quien ordenó la salida de los pileros. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones que denominó: “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Prescripción”, “Inexistencia sustancial del derecho y consecuentemente falta o carencia de acción”, “Buena Fe”, “La Genérica”.

La demandada Centro Sur S.A., explicó que no le consta los hechos narrados en el libelo gestor, pues no tuvo vinculación alguna con el demandante ni conocen si el señor Cesar Emilio Córdoba Palacio la tuvo. Explicó que contrató al señor Cesar Emilio Córdoba Palacios como contratista independiente, cuya ejecución, se encontraba bajo su propia dirección y responsabilidad, con sus propios recursos y herramientas. Negó que se dieran instrucciones u órdenes al demandante. Arguyó que deberá la parte actora probar en el proceso los elementos propios de la relación laboral. Reiteró que no le consta la relación laboral que se pregona en la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, interponiendo las excepciones de: “Inexistencia de la relación laboral”, “Falta de causa para demandar”, “Inexistencia de la obligación de pagar intereses”, “Prescripción”, “Inexistencia de solidaridad”.

En sentencia del doce (12) de junio del año dos mil diecisiete (2017) el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, declaró la existencia de una relación

laboral a término indefinido entre el demandante y el señor Cesar Emilio Córdoba Palacio entre el 16 de abril de 2012 al 21 de agosto de 2012, con una asignación salarial de \$1.900.000 y declaró solidariamente responsable a Centro Sur S.A. Ordenó el pago de: Salarios \$933.333, Auxilio de Cesantías \$659.722, Intereses a las cesantías \$27.488, Prima de servicios \$659.722, vacaciones compensadas \$329.861, indemnización por despido injusto: \$1.900.000. Ordenó desde el 22 de agosto de 2012 los intereses moratorios a la tasa máxima de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera hasta el pago, absolvió de las demás pretensiones y condeno en costas a la demandada Centro Sur S.A.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte actora interpuso recurso de alzada en contra de la sentencia indicando que, el artículo 65 del CST, indica que si al momento de la terminación del contrato de trabajo no se cancela las sumas adeudadas se deberá pagar al trabajador un día de salario por cada día de retardo. Igualmente ofreció reparto sobre la decisión de no tener en cuenta las declaraciones de los señores Tello Palacio y Luis Fernando Palacio, pues para poder tachar a los testigos se debió allegar los medios probatorios que la argumentara, además de ello, haber interpuesto acción judicial no los inhabilita para ser testigos, pues demandan ejerciendo su deber constitucional de acceder a la administración de justicia, sumado a que, son las personas idóneas para exponer lo acontecido.

La parte accionada Centro Sur S.A., exteriorizó al despacho, que no existe prueba alguna que dé pie a determinar que existió un contrato a término indefinido, pues las pruebas indican que se trató de un contrato por obra o labor determinada. Igualmente llamó la atención, que no se puede determinar si entre el demandante y el señor Cesar Emilio existió una relación laboral o una de tipo comercial, pues no se logró establecer la subordinación, en razón a que con la tacha de los testigos que no fueron tenidos en cuenta no se entiende de dónde se extrae el convencimiento de la relación que se dice existió. Enunció que en ninguna parte se puede evidenciar una asignación salarial en cuantía de \$1.900.000 o \$1.800.000, pues para ello se debió determinar el IBC del demandante en ese periodo temporal.

Se opuso a la condena solidaria, pues dijo no haber prueba alguna de ello en el proceso, pues los testigos no pudieron argumentar en debida forma la prestación del servicio en las obras Solares Cielo Azul, ni tampoco que el beneficiario del servicio hubiera sido Centro Sur. Comentó que el artículo 34 habla de la solidaridad frente el objeto social, y la contratación con el co-demandado fue para excavar vías, sin que tenga que ver con el objeto social de Centro Sur, quien no se lucra con ello. Igualmente, al no ser las vacaciones una prestación social, no puede ordenarse su pago solidario. Respecto a la condena de los intereses de mora, expuso que éstos se encuentran ligados con la mala fe y en el caso del demandante no se probó vínculo alguno, por lo cual, no se puede determinar la existencia de buena o mala fe.

ALEGATOS

Corrido el traslado para alegar, la parte demandante expresó encontrarse conforme con la sentencia a excepción de los siguientes puntos: Respecto a la sanción de mora, explicó que si bien es cierto que, la demanda se presentó con posterioridad a los 2 años indicado en el inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 que modificó el artículo 65 del C.S.T, también lo es que el parágrafo 2 de la misma norma, señala que “Lo dispuesto en el inciso 1o. de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo”. (Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C- 38 de 2004), conforme a lo anterior y ante el reconocimiento de la falta de material probatorio, solicita la modificación de la sentencia en cuanto al salario devengado en el mínimo legal mensual vigente.

Expuso también que, se reitera en su oposición a no tenerse en cuenta los testimonios de los señores Yuri Yacson palacios Tello y Luis Fernando Palacios Moreno, quienes eran compañeros de trabajo y quienes podían dar constatar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio la relación que se predica, sin que hubiere parcialidad ni interés.

El accionado apelante expuso que no existió responsabilidad solidaria del contratante por concepto de prestaciones sociales, salariales e indemnizaciones, pues CENTRO SUR S.A. se dedica a actividades inmobiliarias de venta de propiedad, las que no incluyen las actividades de excavación de pilas de fundación ni, en general, ninguna labor de construcción, puesto que, al ser labores especializadas, se contrata su realización con entidades externas.

Insistió en la ausencia de mala fe de su prohilada, e indicó que hubo buena fe respecto a ésta en el desarrollo de la relación contractual y que tampoco puede derivarse mala fe respecto al propio empleador pues citó que sus propios recursos económicos se agotaron de cara a responder por las obligaciones laborales de sus trabajadores, viendo en peligro su vida por tratar de encontrar capital para solventar las obligaciones en las que faltó a sus colaboradores, quedando desvirtuada la mala fe.

Insistió que en este caso al no existir reclamación dentro de los 24 meses siguientes a la terminación del vínculo laboral, se confirme la decisión tomada por el *a quo*. Indicó que el valor tasado por concepto de salarios pues si se adeudaba la última catorcena del 15 de agosto de 2012 al 21 de agosto de 2012, se adeudaría la suma de \$443.31 y no, \$933.333. Insistió en que las vacaciones no son prestaciones sociales y por tanto la solidaridad no puede predicarse sobre éstas y solicitó la absolución de las costas procesales.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar, en atención al recurso interpuesto, si existió o no la relación laboral que se predica en el líbello gestor, si hubo solidaridad entre la empresa Centro Sur S.A. y el demandado César Emilio Córdoba Palacios, respecto a las obligaciones laborales y si sobre ello recae también la condena sobre las vacaciones. Verificar cual era la asignación salarial del demandante y si hubo mérito para la sanción del artículo 65 del CST.

CONSIDERACIONES

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y el artículo 167 ibídem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el principio universal de la carga probatoria, y ha explicado con claridad, que quien afirma una cosa está obligado a probarla. Es, así pues, como quien pretende o demanda un derecho debe alegarlo, y adicionalmente, debe demostrar los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga probatoria al demandado cuando **éste se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado** (sentencia de 5 de agosto de 2009, Expediente 36.549).

En voces de la Corte (CSJ SL, 22 abril 2004, rad. 21779) se explicó así:

«De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado»

Explicado lo anterior, debe decirse, que de la manera en que se enlazó el litigio por la parte accionante, narró que lo vinculó con el señor Cesar Emilio Córdoba Palacios una relación laboral, y que éste último, era contratista de la empresa Centro Sur S.A.

Con respecto a este hecho, el señor Cesar Emilio Córdoba Palacios contestó en el escrito de demanda que si bien no era cierta la modalidad del contrato, si lo unió con el demandante un contrato de trabajo por obra o labor determinada, es decir, el empleador en su libelo responsorial aceptó la existencia de la relación laboral, y los extremos de la misma, oponiéndose tan sólo en la modalidad del contrato respecto a su duración pues el actor insistió en ser a término indefinido y el demandado por obra o labor determinada.

Así las cosas, excluido del debate probatorio se encuentran los fundamentos fácticos que fueron aceptados por el extremo pasivo al cual se le endilgan, pues el demandante no solicitó la existencia de una relación laboral con Centro Sur S.A. sino la figura de la solidaridad frente a éste, pero si, la declaratoria de la relación laboral con el señor César Emilio Córdoba, quien como se insiste, aceptó la misma e incluso, indicó que su capacidad de pago respecto a las obligaciones con sus empleados entre esas el demandante, se encontraba comprometida ante sus menguados recursos económicos, quedando, objeto de debate, el despido, el salario, la modalidad contractual respecto a la duración del contrato y la solidaridad.

Sobre la confesión de parte, de conformidad con los artículos 191, numeral 4.º y 196 del Código General del Proceso, ésta debe ser expresa e indivisible, por lo que, al manifestar la existencia de la relación laboral, al ser éste precisamente un hecho adverso a la parte, debe entenderse como cierto, sin que fuera necesaria la valoración de prueba que coadyuvara tal dicho.

Es así, como no tenía que probarse la existencia de la relación laboral contrario a lo expuesto en el recurso de alzada, pues el elemento probatorio pierde su fin cuando se acepta el hecho que se pretende acreditar.

Sobre la modalidad contractual que es causal de reparo, es importante precisar que, si bien la parte demandada indicó que existió un contrato por obra o labor determinada, este tipo de contratación tiene unas connotaciones especiales.

El artículo 45 del CST establece:

“Duración: El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio.”.

El contrato por obra puede ser escrito o verbal, empero, tiene la particularidad que debe ser identificado en el tiempo de manera tal, que no quede duda alguna sobre los límites temporales del mismo, y este, es un aspecto de gran relevancia, pues en el caso que nos ocupa, debía estar limitado de manera especial a la permanencia del contrato civil suscrito por el señor Cesar Emilio Córdoba Palacios y Centro Sur SA o bien por el total de la vida útil de una obra determinada en cabeza de Centro Su, situación pues que no se logra delimitar en el presente proceso.

En sentencia SL023-2022 se determinó lo siguiente:

«En el caso del contrato de trabajo por duración de obra o labor contratada, la ley no impone un medio probatorio específico. Por ello, su existencia puede darse a través de cualquier elemento de convicción; incluso, lo acordado en ese sentido, puede colegirse de las características propias de la actividad. Bajo esta línea de pensamiento, la Corte ha explicado que «(...) la obra o labor contratada debe ser un aspecto claro, bien delimitado e identificado en el convenio, o que incontestablemente se desprenda de «la naturaleza de la labor contratada», pues de lo contrario el vínculo se entenderá comprendido en la modalidad residual a término indefinido.».

Es, así pues, como de la existencia de varias obras realizadas por la codemandada Centro Sur S.A. en el Municipio de la Estrella, no puede limitarse con certeza el margen temporal de la relación contractual conforme el acuerdo de voluntades, y en razón de ello, se concluye la existencia de un contrato a término indefinido.

Respecto al salario indicando por el demandante, y que el *a quo* determinó en cuantía de \$1.900.000, debe indicarse que, en el hecho quinto de la demanda se enunció que el último salario del demandante era la suma de \$1.960.000 y al

momento de dar respuesta a la demanda se refirió ser cierto, pues ello era consecuencia de la labor que se realizaba, pues se pagaba sobre la metros lineales, pila escavada, piedras extraídas o pulgadas de quema de minería, pero que en algunos casos era una suma menor. Igualmente, en el interrogatorio de parte, expuso el señor Cesar Emilio Córdoba que el actor recibía una asignación salarial que dependía de las condiciones del terreno, entre \$1.800.000, \$1.900.000 y \$2.000.000 (min 815), confesión del demandado espontánea, clara, precisa, sin que haya lugar a verificación alguna por parte de la judicatura como bien lo indica, por el contrario, la Juez de primera instancia realizó con los valores dados, un promedio que arrojaba la suma de \$1.900.000 y sobre dicha cuantía impartió las condenas correspondientes en total coherencia con las confesiones dadas.

No entiende entonces el despacho la razón por la cual la parte actora en los alegatos informa que debe tenerse en cuenta un salario igual al mínimo legal mensual vigente, pues de manera clara se predicó en el mismo escrito genitor una suma muy superior, ni tampoco se comparten las precisiones de la pasiva respecto a la orfandad probatoria, pues se insiste, los hechos confesados por la parte a la cual le son adversos no requieren demostración alguna, puede de ser así, dicha figura perdería todo su alcance probatorio.

Igualmente, siendo objeto de pronunciamiento en el recurso de alzada, de ambos deponentes, la *a quo* desestimó los testimonios de los señores Tello y Palacio, debe precisarse que, la tacha del testimonio establecida en el artículo 58 del CP T y SS, da pie no a desechar la declaración, sino, a que el juzgador debe sopesarla y valorarla con especial rigor, pues si el declarante estuvo presente cuando sucedieron los hechos y puede dar noticia acerca de ellos, su versión puede ser fundamental para establecer la verdad real (CSJ SL, 30 sept. 2014, Rad. 22484). Si bien la parte demandada no allegó prueba documental de los presuntos intereses de los testigos en las results del proceso, si informó de manera clara que ambos contaban con procesos con idénticas pretensiones en el mismo despacho, situación a las luces del artículo 61 del CPT y SS la juez de instancia valoró para no atender a los dichos de éstos.

Equivalentemente, debe decirse que si bien la parte actora difiere de ese punto en la sentencia no le asiste agravio.

DE LA SOLIDARIADAD.

Ahora, la solidaridad tiene 3 fuentes, la Ley, el contrato y el testamento. En el caso de autos, quedó aceptado por la demandada Centro Sur S.A. que lo unía con el señor Cesar Emilio Córdoba Palacios, un contrato de obra de excavación de pilas y actividades conexas, las cuales se desarrollaron en tres proyectos, uno de ellos, Polaris Cielo Sur en el cual se aceptó la prestación del servicio del actor.

Sobre la solidaridad, el artículo 34 del CST reza:

“1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos {empleadores} y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.

2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas”.

El alcance de ésta disposición advierte que la solidaridad del beneficiario de la obra realizada por el trabajador no se presenta automáticamente, o en todos los eventos, sino exclusivamente cuando las labores desempeñadas por el trabajador no sean ajenas al giro ordinario de sus negocios. La excepción a la solidaridad, es decir, cuando las labores son ajenas al giro ordinario de los negocios del beneficiario de

la obra, fue declarada exequible por la H. Corte Constitucional en la sentencia C 593 de 2014, en donde se reflexionó:

“3.6.1.5 Se observa entonces que la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, dentro del marco de sus competencias, han aplicado e interpretado la figura de la solidaridad laboral prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. A partir de ella, se ha impuesto límites al uso irregular de la contratación independiente, imponiendo el pago compartido tanto del contratista independiente como de la empresa que se beneficia de la labor. De igual manera, como criterio de distinción entre el uso legítimo y constitucionalmente válido de la tercerización y aquél uso irregular y vulneratorio de los derechos de los trabajadores, se encuentra la determinación si el empleado realiza funciones propias del giro ordinario de la empresa o entidad. Esto último, teniendo en consideración el concepto amplio que ha sido acogido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en el entendido que para que proceda la figura de solidaridad laboral basta con demostrar que no son labores extrañas al desarrollo de la empresa.

Es por ello que la distinción hecha por la disposición entre aquellos trabajadores del contratista que desarrollen funciones normales y ordinarias de la empresa contratante y aquellas ajenas a la misma, tiene su fundamento en el objeto y fin del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto es, evitar que la referida empresa utilice la llamada tercerización para evadir las obligaciones laborales y esconda verdaderos contratos realidad para desarrollar las funciones o labores que le son propias para cumplir su objeto social.”.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral también ha interpretado los alcances de ésta norma, indicando en las sentencias de radicación 38.651 de 2014, 49.730 de 2016 y SL 715 de 2019 que el presupuesto de la solidaridad es la **afinidad** en las actividades desplegadas por el contratista independiente y por el beneficiario, precisando que aun cuando no se exige identidad, si debe existir correlación entre las actividades.

En el contexto de la subcontratación, aclaró la H. Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 3198 de 2019, que el contratista, es un verdadero beneficiario de las labores desempeñadas por el trabajador a través del sub contratista, así:

“En segundo lugar, resulta imperativo recordarle al censor que la responsabilidad solidaria consagrada en el artículo 34 del CST no se predica únicamente del beneficiario directo o dueño de la obra, sino también del contratista independiente y del subcontratista, como quiera que éstos deben ser mirados, asimismo, como beneficiarios de los servicios prestados por el trabajador, así sea de manera indirecta, dado el carácter tuitivo o proteccionista del derecho laboral, razón por la cual también se torna intrascendente el hecho de que el Tribunal no hubiera efectuado expresamente un análisis tendiente a verificar si Vicon S.A. era la beneficiaria de las labores desarrolladas por el trabajador fallecido”.

Frente al tema, en sentencia CSJ SL, 27 oct. 1989, rad. 3321, reiterada en la CSL SL869-2019, rad. 56394, esta Sala adoctrinó:

“La acusación que se le hace al ad-quem de interpretar con error el Artículo 3º del Decreto 2351 165, que modificó al 34 del CS T., se hace consistir en que tal precepto sólo hace solidariamente responsable de los derechos laborales del trabajador al dueño de la obra y al contratista o a aquél y el sub-contratista, mas no al contratista y al subcontratista.

La Sala se permite observar que el Tribunal no equivocó la inteligencia de dicha norma cuando dedujo responsabilidad solidaria del contratista y subcontratista demandados porque analizada detenidamente esa normatividad y desentrañando su espíritu, es necesario concluir que para eventos como el aquí ocurrido, el contratista debe ser mirado, pues realmente lo es, como un beneficiario de los servicios prestados por el trabajador a través del subcontratista ya que no debe perderse de vista el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral; por consiguiente. lo que se predique del contrato entre el dueño de la obra y el beneficiario del trabajo o de la prestación del servicio, en este caso A. l. C. LTDA., no puede perjudicar al trabajador del subcontratista, pues frente a aquél, se repite, el contratista tiene que ser considerado como beneficiario del servicio personal que presta el trabajador como que a la postre se aprovecha, aunque sea indirectamente, de la labor ejecutada por el trabajador, máxime, como se desprende del infolio, la actividad normal de A. l. C. ltda. pertenece a las normales del codemandado José Darío Mora T aborda. (subrayado fuera de texto)”.

El *a quo* determinó que siendo el objeto de la contratación entre el señor César Emilio Córdoba Palacios y Antonio Jaicinio Palacios Tello el servicio de pilero en

las obras desarrolladas por Centro Sur SA, ante la afinidad de la labor, y la correlación entre ésta, se considera Solidariamente responsable a Centro Sur S.A., conclusión coherente con los presupuestos citados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sumado a, que en el objeto social de dicha empresa se encuentra **“Intervenir en la construcción de proyectos inmobiliarios en general, cualquiera que sea la destinación de los inmuebles, con la finalidad de enajenar a título oneroso los respectivos proyectos...celebrar contratos relacionados con la construcción”**, siendo indiscutible que la construcción estuviera inmersa en su objeto social, y la celebración de contratos para dicha ejecución, por lo que, indudablemente, le asistió razón al juzgador de primera instancia al declarar la responsabilidad solidaria.

Sobre las vacaciones, si bien no son una prestación social sino **un descanso remunerado de carácter salarial**, deben hacer parte de la solidaridad descrita, pues al hacer parte del salario, caen dentro de la descripción del artículo 34 en comento así: *“será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores”*, por lo cual, se despacha desfavorablemente lo indicado en el recurso de alzada.

Ahora, respecto a la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, la Sala Laboral ha precisado, que la imposición de esta, no tienen aplicación automática, pues **la buena fe demostrada del empleador** es suficiente para eximir de ello.

Igualmente, en sentencia SL 194 de 2019, refirió que **es el empleador** quien finalmente tiene la carga de demostrar que actuó sin intención fraudulenta, lo cual, había sido objeto de pronunciamiento en sentencia de radicación N° 32.416 de 2010 y en la SL 11436 de 2016, cuando refirió:

“Por lo demás, cabe anotar que si bien es cierto en algún momento del desarrollo de su jurisprudencia esta Sala de la Corte consideró que, de cara a la imposición de la sanción por mora en el empleador incumplido existía una presunción de mala fe, ese discernimiento no es el que en la actualidad orienta sus decisiones, porque, pese a que mantiene su inveterado y pacífico criterio sobre la carga del empleador para exonerarse de la sanción por

mora, de probar que su conducta omisiva en el pago de salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato estuvo asistida de buena fe, considera que ello en modo alguno supone la existencia de una presunción de mala fe, porque de las normas que regulan la señalada sanción moratoria no es dable extraer una presunción concebida en tales términos, postura que, ha dicho, se acompasa con el artículo 83 de la Carta Política.”.

En el caso de marras el señor César Emilio Córdoba expuso su precaria situación económica, pero ello, no es suficiente para que se tenga como probada su buena fe, pues las obligaciones laborales hacen parte de un derecho **preferente y proteccionista en el cual debe garantizarse al trabajador el lleno de las garantías y derechos dados por el legislador**, sin que se pueda simplemente excusar al empleador que expone su precariedad económica para ello, sin pruebas que acrediten sus dichos.

Conforme se indicó, el demandante devengó un salario superior al mínimo legal mensual vigente, y no reclamó el pago de las prestaciones en los 24 meses siguientes a la terminación de la relación laboral, y en estos casos, la Sala laboral ha explicado con total claridad: (CSJ del 6 de mayo de 2010):

“No obstante las notorias deficiencias en la redacción de la norma, esta Sala De la Corte entiende que la intención del legislador fue la de establecer un límite temporal a la indemnización moratoria originalmente concebida por el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, de tal suerte que, como regla general, durante los veinticuatro (24) meses posteriores a la extinción del vínculo jurídico el empleador incumplido deberá pagar una suma igual al último salario diario por cada día de retardo y siempre y cuando el trabajador haya iniciado su reclamación ante la justicia ordinaria dentro de veinticuatro (24) meses, como aconteció en este caso.

Después de los veinticuatro meses, en caso de que la situación de mor persista, ya no deberá el empleador una suma equivalente al último salario diario, sino los intereses oratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la superintendencia Bancaria, hoy financiera, hasta cuando el pago de lo adendado se verifique efectivamente; intereses que se calcularán sobre las sumas debidas por conceptos de salarios y prestaciones en dinero.

Cuando no se haya entablado demanda ante los estrados judiciales, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes al fenecimiento del contrato de trabajo, el trabajador no tendrá derecho a la indemnización moratoria equivalente a un (1) día de salario por cada día de mora en la solución de los salarios y prestaciones sociales, dentro de ese lapso, sino a los intereses moratorios, a partir de la terminación del contrato de trabajo, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera”.

Se habrá por tanto de confirmar la condena, respecto a los intereses a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera, la que, claramente cesará al momento del pago de todas las acreencias laborales ordenadas.

Ahora, como obligado solidario, en lo que a la indemnización moratoria refiere, es decir en este caso, al pago de los intereses a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera, el artículo 34 del CST extendió la solidaridad a las indemnizaciones laborales, incluyendo la moratoria, como lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en sentencias como la SL 1406 de 2022.

“De una lectura del artículo 34 del CST, se colige que la solidaridad que emana de la ley, traduce al responsable solidario como un garante de las obligaciones que resulten a cargo del empleador, por lo que la conducta que se examina en aras de determinar la procedencia de la indemnización moratoria, es la del empleador directo, que, en este caso fue objeto de estudio en sede extraordinaria encontrándose un actuar del empleador desprovisto de buena fe, por lo que no resulta relevante analizar la buena o mala fe del Municipio, pues frente al marco jurídico resulta intrascendente, toda vez que, se insiste, el ente territorial responde, no por haber actuado de mala fe, sino por el fenómeno de la solidaridad, la cual no fue cuestionada en casación.

Para ello es necesario recordar que la figura de la solidaridad fue instituida en la normatividad laboral, con el objeto de garantizar el pago de las acreencias laborales de los trabajadores en los casos que se presentan tercerizaciones, para que, los beneficiarios o

dueños principales de las obras funjan como garantes del pago de las prestaciones que resulten a favor de los trabajadores.”

Conforme a ello, se confirmará la condena impuesta.

La precisión realizada por la pasiva en sus alegatos respecto a las costas procesales y sobre el pago de la última catorcena salarial no fue objeto de recurso de alzada en la oportunidad para ello, por lo cual, no se hará modificación alguna, de cara a lo establecido en el artículo 66A del CPT Y SS.

Así las cosas, la Sala **CONFIRMAR INTEGRAMENTE** la decisión proferida en primera instancia.

Sin costas en esta instancia, ante la desventura de los recursos de las partes.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida en primera instancia de manera íntegra.

SEGUNDO: sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3bf5f884d9dbe4c61f4b888ca8be42ebc5ec3c994310e06af589abb383f691f9**

Documento generado en 19/05/2023 02:50:36 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>